



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

"2017, Un siglo de constituciones".

San Luis Potosí, S. L. P. A 16 de enero de 2017



0005360

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES SECRETARIOS.  
**P r e s e n t e s .**

La que suscribe, **Josefina Salazar Báez**, diputada integrante de esta Sexagésima Primera Legislatura y del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, con fundamento en lo que disponen los artículos 61 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí**; 130 y 131 de la **Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado**; y 61, 62, 65 y 66 del **Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado**, presento a la digna consideración de esta Soberanía, la **Iniciativa con Proyecto de Decreto** que pretende **ADICIONAR** un artículo 158 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí; la cual tiene **por objeto establecer en la legislación penal del estado el delito de desaparición forzada por particulares**. Sustento lo anterior en la siguiente:

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición forzada de personas es en nuestro país, un delito que en los últimos años ha registrado una incidencia creciente y preocupante. Considerando que su comisión no solamente provoca un perjuicio directo a la víctima, sino un devastador efecto moral en las familias y seno de la sociedad misma, podemos afirmar que esa conducta antisocial es de las que provocan mayor grado de resquebrajamiento en la convivencia en comunidad y erosión del tejido social.



*"2017, Un siglo de constituciones".*

De forma análoga, los esfuerzos institucionales y normativos han concurrido con mayor celeridad en los últimos años buscando atender el emergente fenómeno delictuoso. Fue el 10 de Julio de 2015 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes y establecer los tipos penales relativos a las distintas formas de privación ilegal de la libertad.

La redacción de la modificación constitucional quedó en los siguientes términos:

**Artículo 73.** *El Congreso tiene facultad:*

...

...

**XXI.** *Para expedir:*

**a)** *Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.*

...

Para entonces, nuestra entidad ya había dado algunos pasos en este sentido. El 20 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 979, en el cual se promulgó la reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales en materia de desaparición forzada de personas.



*"2017, Un siglo de constituciones".*

En lo relativo al Código Penal se tipificó el delito de "desaparición forzada de personas", el cual se consideró como de lesa humanidad y se estableció una pena de hasta 40 años de prisión. Sin embargo, el nuevo tipo penal circunscribió la comisión del delito para aquel **servidor público** que "detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes". O bien, para aquel particular que participara en la comisión del delito siempre que hubiera actuado "por orden, apoyo o consentimiento **del servidor público**". En ambos casos, se estableció que este delito sería castigado con una pena de 15 a 40 años de prisión, así como una sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo.

También quedó definido que "el delito al que se refiere (ese) capítulo sería de consumación permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión". Además de dejarse abierta la posibilidad de que "las sanciones previstas en el artículo precedente se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos; y en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima".

En lo relativo a la reforma al Código de Procedimientos Penales publicada en el Decreto 979, esta tuvo la finalidad de integrar el delito de "desaparición forzada de personas" dentro del catálogo que establece los delitos considerados como graves por la legislación potosina.



*"2017, Un siglo de constituciones".*

No obstante los empeños de legislar a nivel local sobre el delito de desaparición forzada, la norma jurídica potosina circunscribió (como la mayoría de Legislaturas de otros estados) la comisión del tipo penal a la figura de servidores públicos o a otros que no siéndolo, actuasen bajo su influencia, excluyendo por ende, una de las aristas del delito que desde nuestro punto de vista, debe ser reconocido con urgencia por nuestra legislación: la desaparición forzada de personas por particulares.

Sobre este delito en particular, ya ha habido algunos intentos por reconocerlo a nivel federal, e incluso en algunas entidades federativas es ya una realidad.

Por ejemplo, previo a la reforma constitucional, el 2 de diciembre de 2014, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII legislatura, presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas, la cual perseguía dos objetivos fundamentales:

- 1°. Definir y fortalecer el proceso de búsqueda con vida de las personas desaparecidas; y
- 2°. Sentar el precedente de una política de prevención de desapariciones.

En el artículo 10 de la ley en cita, se conceptualizó el delito de Desaparición por Particulares en los siguientes términos:

*Artículo 10°. El delito de desaparición de personas cometido por particulares se entenderá como la privación de la libertad, cualquier que fuere su forma, de una o más personas cometida por particulares que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del*



*"2017, Un siglo de constituciones".*

*Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, seguida de la falta de información, sustrayéndola así de la protección de la ley.*

La incidencia creciente del delito de desapariciones ganó visibilidad por el número de víctimas y víctimas secundarias y porque la sociedad civil comenzó a organizarse para proponer a los Congresos modificaciones legislativas e institucionales que dotaran de más y mejores instrumentos para la prevención, atención, investigación y sanción de este delito. Producto de lo anterior, familiares de personas desaparecidas, organizaciones no gubernamentales, académicas y especialistas en Derechos Humanos publicaron en octubre de 2015 el documento de trabajo: "Elementos Esenciales para la Elaboración de La Ley General Sobre Personas Desaparecidas en México", ahí se propuso la siguiente definición para el delito de desaparición personas por particulares:

*"La privación de la libertad en cualquier forma cometida por personas o grupos de personas que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento o de la negativa a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida."*

Como puede cotejarse en ambas iniciativas, el factor común es que en primer lugar, prescinden del elemento de orden o aquiescencia de parte de un servidor público; y en segundo, en el ocultamiento o negación a proporcionar información para encontrar a la persona desaparecida.



*"2017, Un siglo de constituciones".*

Haciendo un análisis de la forma en que se regula el objeto de la presente iniciativa observaremos que en nuestro país, cuatro son las entidades que cuentan con una ley específica en materia de desaparición de personas: Guerrero, Morelos, Querétaro y la Ciudad de México; y una más, Coahuila, tiene una ley específica de orden procedimental, la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza. No obstante, solamente en el marco jurídico de tres entidades se reconoce la desaparición forzada de personas por particulares: Ciudad de México, Querétaro y Coahuila.

En el caso de la Ciudad de México, la desaparición forzada de personas por particulares se encuentra reconocida en el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares:

*ARTÍCULO 7.- Comete el delito de desaparición por particulares, la persona que no teniendo el carácter de servidor público del Gobierno del Distrito Federal y que sin actuar por orden, autorización, aquiescencia o apoyo de uno o más servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, priven de cualquier forma la libertad de la o las personas, o bien autorice, apoye, consienta o tolere que otros lo hagan, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer la existencia de tal privación con la finalidad de ocultar o no proporcionar información sobre el paradero o localización de la víctima; y, se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 67,290 a 100,935 Unidades de Cuenta.*

*Las sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos.*



*"2017, Un siglo de constituciones".*

*Este delito no prescribirá.*

Respecto del estado de Querétaro, debe apuntarse que el 7 de junio de 2014 entró en vigor la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro, en esa legislación la desaparición forzada por particulares quedó establecida en el artículo 5 que a la letra dice:

*Artículo 5. Comete el delito de desaparición de personas por particulares, el que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.*

*Esta conducta será sancionada con una pena de doce a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a setecientos días multa, sin perjuicio del concurso de delitos.*

El estado de Coahuila también reconoce la desaparición forzada por particulares pero a diferencia de las legislaciones de la Ciudad de México y Querétaro, la tipificación se realiza en el Código Penal del Estado, cuyo artículo 212 BIS preceptúa:

*ARTÍCULO 212 BIS.- SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE DESAPARICIÓN DE PERSONA. Se aplicará una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye*



*"2017, Un siglo de constituciones".*

o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley. Las mismas penas se impondrán al particular que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior. Se le aplicará una pena de diez a cuarenta años de prisión a quien incurra en la conducta anteriormente descrita, cuando sea obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado. Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de quien hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida o el paradero de la víctima.

Los delitos a que se refiere este Artículo son de ejecución permanente hasta que se esclarezca el paradero de la víctima.

La acción penal derivada de los delitos a que se refiere este Artículo y la pena que se imponga judicialmente al responsable, no estarán sujetas a prescripción. Lo relativo a la reparación del daño a favor del ofendido o víctima en caso de resultar procedente, se atenderá a lo que se establece en el título quinto, capítulo noveno del presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables.

De las entidades que sancionan la desaparición forzada de personas por particulares, dos la establecen en una legislación expofeso y otra en el Código Penal.





*"2017, Un siglo de constituciones".*

En virtud del fenómeno delictivo que se presenta en nuestro estado, y que se ha vuelto particularmente sensible en delitos como homicidio doloso, feminicidios y desapariciones forzadas, es necesario que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad y urgencia, apoyando el trabajo que realizan las instituciones públicas encargadas de prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos, proveyéndolas de un marco jurídico referencial y de atribuciones que les permitan enfrentar estos desafíos con mayor eficacia.

Actualmente, por carecer de un tipo penal como el que proponemos, los ministros públicos tienden a clasificar este delito como secuestro o desaparición forzada sin serlo, en otros casos, su acción se constriñe a levantar simples reportes, por lo que en muchas ocasiones, tampoco se abren las carpetas de investigación que corresponden; no se aplican debidamente los protocolos de búsqueda de personas; no se lleva un control y adecuada sistematización de la estadística delictiva; y no se actúa con todo el peso del Estado en la sanción de estas graves conductas ilícitas.

Es por esa razón, que sin menoscabo de que en el corto o mediano plazo se pueda trabajar en la confección de una Ley para Prevenir, Erradicar y Atender las Desapariciones Forzadas y por Particulares en San Luis Potosí, el Congreso del Estado se aboque al estudio de la presente iniciativa y acuerde la aprobación de un tipo penal que reconozca algo que ya está ocurriendo en la sociedad y que lastima a muchas familias que sin esta tutela, están quedando en la indefensión.

De lo que se trata, es de dar pasos firmes para proteger la integridad de las familias potosinas y sus integrantes, y mejores herramientas de trabajo a nuestras autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

*"2017, Un siglo de constituciones".*

Algo que no podemos olvidar es que bajo la argumentación jurídica, subyace la dolorosa realidad de las víctimas y sus familias. Según Amnistía Internacional en su Informe "Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición forzada de personas en México" de junio de 2013: "La desaparición de un ser querido tiene un efecto devastador en la familia. La ausencia inexplicada deja a los afectados en la incertidumbre, asediados por los miedos sobre las penurias por las que aún puede estar pasando su hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana, y temiendo lo peor".

Nuestra propuesta, reconoce el delito de desaparición forzada de personas por particulares; establece que el delito no prescribirá y la misma pena y sanción pecuniaria que el delito de desaparición forzada; contempla la reparación del daño para las víctimas y las víctimas secundarias; y establece sanciones para quienes encubran o a quienes lo hagan.

En síntesis, responde a uno de los reclamos sociales más sensibles y más sentidos. Exhorto respetuosamente a mis compañeras y compañeros legisladores a que actuemos con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad.

Con base en los motivos expuestos presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

#### **PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.** Se *REFORMA* la fracción IX al artículo 113, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

#### **CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TÍTULO SEGUNDO**



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

*"2017, Un siglo de constituciones".*

**DELITOS CONTRA LA PAZ, LA LIBERTAD, Y LA SEGURIDAD  
DE LAS PERSONAS**

**CAPÍTULO IV**

**Desaparición Forzada de Personas**

**ARTÍCULO 158 BIS.** Comete el delito de desaparición de personas por particulares, la persona o grupos de personas que, no teniendo el carácter de servidores públicos, en cualquier forma priven de la libertad a otra persona, o bien consientan, apoyen, encubran o toleren que otros lo hagan, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento o de la negativa a proporcionar información sobre el paradero o localización de la persona desaparecida.

Esta conducta será sancionada con una pena de doce a cuarenta años de prisión y sanción pecuniaria de mil quinientos a cuatro mil días de salario mínimo, además de la obligación de reparar el daño a la víctima y a las víctimas secundarias.

Este delito no prescribirá.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Estado "Plan de San Luis".

**SEGUNDO.** Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

**ATENTAMENTE**

**JOSEFINA SALAZAR BÁEZ**  
Diputada Local

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

0005360